

Encuentros y desencuentros: la compleja relación entre el gobierno y los movimientos sociales en Ecuador

Ana María Larrea*

* *Coordinadora Académica
e Investigadora
del Instituto de Estudios
Ecuatorianos (IEE),
Quito, Ecuador.*

El triunfo electoral de Rafael Correa en Ecuador ha abierto grandes esperanzas para el campo popular en el país y América Latina. Con una propuesta abiertamente antineoliberal, Correa capitaliza una importante historia de luchas y resistencias sociales frente a un modelo concentrador y excluyente que por más de dos décadas ha reinado en Ecuador; modelo que ha provocado una desigualdad social sin precedentes en la historia del país, el empobrecimiento de millones de personas y una crisis política que llevó a que en la última década ningún presidente electo haya podido concluir su mandato.

Los planteamientos del programa de gobierno del presidente Correa no son nuevos. Por más de dos décadas, han sido parte de la plataforma de lucha de los principales movimientos sociales del país. Sin embargo, Correa logra llegar con ellos a grandes sectores de la población que tradicionalmente se habían mantenido lejos de un eje discursivo que pudiera ir más allá de las ofertas materiales

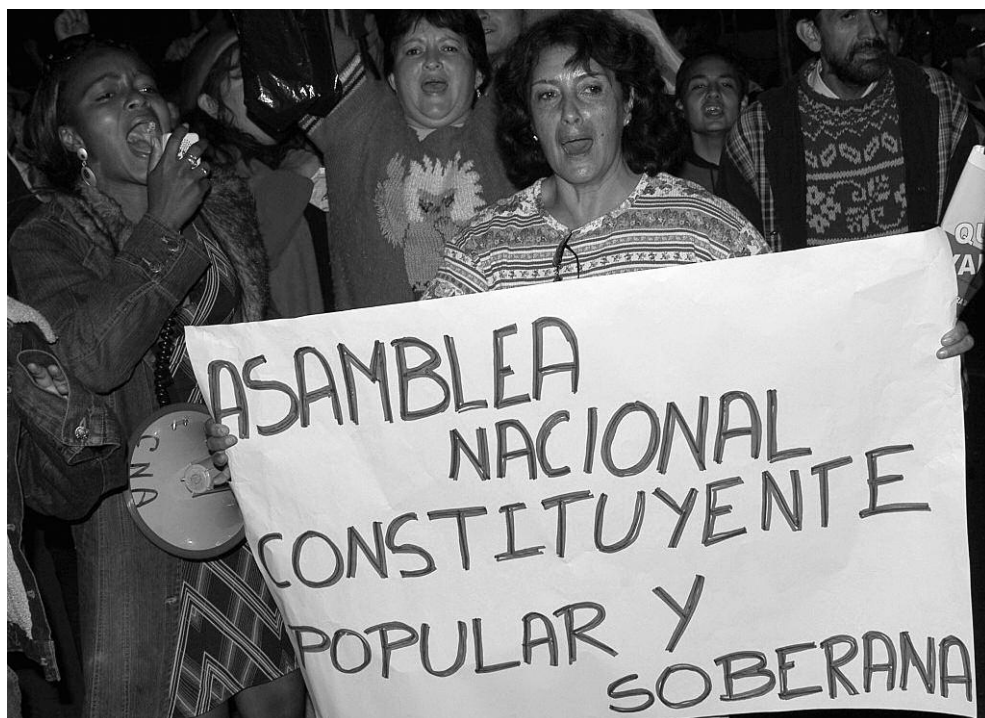
para solucionar una situación de vida angustiante. La toma de posición del entonces candidato a la presidencia de la República lleva a una politización muy importante de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, que conduce a que para la segunda vuelta electoral, un sinnúmero de colectivos sociales se vuelquen a trabajar por un sueño que en esos días parecía imposible: vencer electoralmente al hombre más millonario del país. La victoria de Correa fue fruto de un trabajo que rebasó con creces la estructura de su propio movimiento político y permitió, insólitamente y contra todo pronóstico, revertir las tendencias electorales en las últimas dos semanas de campaña. De esta manera, el triunfo de Correa se convirtió en el triunfo de todos/as y abrió las puertas a un proceso de cambios indispensables para el país.

Los primeros cuarenta y cinco días de gobierno han sido de tal intensidad que parecerían años. Los grupos de poder no han dado tregua. Antes de que Correa asumiera la presidencia, ya se había formado un frente de oposición dispuesto a enfrentar al régimen con todas sus fuerzas. Los tradicionales cien días de espera para evaluar las acciones del nuevo gobierno quedaron en el olvido, pues para los sectores dominantes la disputa es demasiado seria como para admitir cualquier tregua.

Para los movimientos sociales, la presidencia de Correa conlleva un doble desafío; por un lado, el de apoyar un régimen que enarbola y defiende sus planteamientos históricos sin hipotecar su fuerza acumulada y su autonomía; y por otro, aportar en la construcción del proyecto histórico liberador señalando fraternalmente los errores que el gobierno comete y puede cometer, sin que esto signifique alimentar los planteamientos conservadores de los sectores dominantes y del gran capital, que están a la caza de cualquier fisura que pueda presentarse para corroborar sus tesis defensoras del statu quo.

Realizar una adecuada lectura de la correlación de fuerzas existente, sin sobrevalorar las propias capacidades ni menospreciar al contendor, es imperativo en el momento de ejercer presión para que se lleven adelante los cambios profundos que el país requiere, de manera que se vayan alcanzando paulatinamente los objetivos trazados y, en aquellos momentos en los que sea necesario, resistir frente a la embestida de los grupos dominantes, que harán todo cuanto esté en sus manos para que el régimen fracase.

Enfrentar estos desafíos no resulta fácil para los movimientos sociales, pues la historia de los últimos años ha estado marcada por un gran número de fisuras. En el actual momento histórico, es imperioso generar un proceso de unidad que, a partir de la enorme diversidad y heterogeneidad de los sujetos sociales, permita la construcción de un proyecto de liberación desde los sectores oprimidos. Sin embargo, para que este proceso de unidad pueda llevarse adelante, es necesario también enfrentar una profunda autoevaluación del accionar de los movimientos sociales y partidos de izquierda en Ecuador, y estar dispuestos/as a enmendar los profundos errores que se han cometido en los últimos años.



© Patricio Realpe

La situación se complejiza aún más al analizar la relación desde el gobierno hacia los movimientos sociales. La génesis de esta relación está marcada por el desencuentro con algunas de las fuerzas sociales más importantes en la primera vuelta, que no ha logrado saldarse completamente. No obstante, la política no puede ser manejada como un campo de resentimientos y revanchismos, pues los intereses en juego son de tal magnitud, que exigen una actitud generosa tanto por parte del gobierno como de los principales movimientos sociales del país. Es preciso deponer posiciones personales y antiguos problemas y estar dispuestos a unir esfuerzos en pos de la necesaria transformación del país.

Pareciera ser que por parte del gobierno se tiende a sobrevalorar el apoyo popular logrado el 26 de noviembre, y menospreciar la contribución de los movimientos sociales a un proyecto político en el que existen más puntos en común que desencuentros. La poca importancia que el gobierno ha otorgado a los movimientos sociales se evidenció en algunos hechos. El primero, cuando consultó a los partidos políticos sobre el primer estatuto electoral para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y obvió a los representantes de los movimientos sociales de la consulta, y por consiguiente del acuerdo.

El segundo indicador fue el pedido que realizó el presidente al Consejo de Educación Superior (CONESUP) de que se formara una comisión para la elaboración de una pro-

puesta de nueva Constitución, que servirá de punto de partida para la discusión en la ANC. Nuevamente, los movimientos sociales no fueron tomados en cuenta para ser parte de la comisión. El comportamiento gubernamental desconoce la fuerza social y política de colectivos sociales cuyos planteamientos históricos abrieron las puertas para que el país viviera el fenómeno Correa. La comisión quedó compuesta por notables juristas de algunas de las universidades más representativas del país. Hace pocos días, el presidente posesionó a la comisión y nombró a una delegada de la Presidencia de la República ante la misma, quien será la única mujer joven que proviene de las filas de los movimientos sociales en la comisión. Ocho Comisionados, ocho Juristas de renombre, ocho Varones, ocho Profesores Universitarios, más una delegada de la presidencia, también abogada y profesora universitaria. Sin desconocer los méritos de los comisionados y la comisionada, surgen varios interrogantes respecto a esta estrategia presidencial. ¿Será que el presidente piensa que la propuesta de nueva Constitución es una tarea jurídica que debe ser encarada por especialistas en el ramo? Se trata de una visión bastante restringida de un proceso alentador de cambio social, de un proceso eminentemente político en el que se busca establecer un nuevo pacto social que responda a los vientos antineoliberales que recorren América Latina y permita generar condiciones de mayor equidad para las grandes mayorías en Ecuador. Esta es una tarea gigantesca que no puede ser reducida a los importantes, pero insuficientes, criterios jurídicos. Y en esta tarea gigantesca, los movimientos sociales tienen mucho que decir y aportar. Ahora, los “notables juristas” aseguran que su tarea es “recoger las propuestas de la ciudadanía y de los movimientos sociales”. ¿No hubiese sido mejor pensar en una comisión plural conformada por académicos/as de prestigio, representantes de los movimientos sociales y las fuerzas progresistas del país? ¿Una comisión que representara los intereses de los sectores del cambio y que con su trabajo pudiera ir generando condiciones para construir el mul-

“Pareciera ser que por parte del gobierno se tiende a sobrevalorar el apoyo popular logrado el 26 de noviembre, y menospreciar la contribución de los movimientos sociales a un proyecto político en el que existen más puntos en común que desencuentros”

ticolor abanico de fuerzas necesarias para enfrentar a aquellas poderosas minorías retrógradas que no están dispuestas a perder ni un ápice de las prebendas y beneficios que les trajo el neoliberalismo?

Un tercer hecho, no menos importante, fue la creación por parte del gobierno de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. ¿Un intento de comandar a las organizaciones desde el gobierno? ¿Una forma de institucionalizarlas? ¿Una secretaría para “construir” la base social del gobierno? ¿O un espacio para establecer canales de diálogo y formación de alianzas desde una óptica de respeto a la diversidad y las diferencias?

El reconocimiento de la diversidad en sus múltiples expresiones (étnica, etaria, de género, de opción sexual) no parece ser el fuerte del nuevo gobierno. Tampoco se ha manifestado una voluntad de propiciar un diálogo horizontal para la construcción de alianzas necesarias para llevar adelante su ambiciosa agenda de cambio.

Si volvemos la mirada hacia los movimientos sociales, el panorama tampoco es muy alentador. En un momento de repliegue y debilidad, la tan mentada construcción de la unidad con miras a la participación electoral para la Asamblea Constituyente parece cada vez más lejana. Un sinnúmero de etiquetas sin representados prolifera, así como también aumenta el número de precandidatos/as. Sobran candidaturas y escasean propuestas, se posterga la discusión sobre los contenidos y abundan las disputas y los pleitos cuasi-domésticos. ¿Será que los tan esperados cambios de pronto alteran su dirección y terminamos eligiendo una Asamblea Constituyente que refuerce y fortalezca el modelo neoliberal en Ecuador? Si las cosas no cambian de rumbo y las actitudes de intolerancia, sobrevaloración de fuerzas, personalismos, protagonismos y pérdida de horizontes políticos continúan como hasta el momento, podríamos perder una oportunidad histórica a la que tanto trabajo nos ha costado llegar.